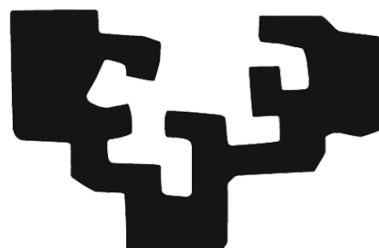


eman ta zabal zazu



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

GRADO EN DERECHO

FACULTAD DE DERECHO (VIZCAYA)

CURSO 2020/2021

**LENGUAJE JURÍDICO: CONFLICTOS
COMUNICATIVOS EN EL ÁMBITO JURÍDICO Y
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**

**ALUMNA: IRATXE MARTÍNEZ ANGUIANO
DIRECTOR: XABIER ALBERDI LARIZGOITIA**

RESUMEN:

El presente trabajo se centra en el estudio del lenguaje jurídico y su problemática actual. Para ello el trabajo está estructurado de tal manera que se comprenda, no sólo qué es el lenguaje jurídico y los conflictos que genera en el ámbito judicial, sino también la gran influencia de los medios de comunicación en su uso y transmisión.

El origen de este trabajo se debe a que el lenguaje jurídico es un lenguaje de especialidad que tiene ciertas características y particularidades que lo hacen difícil de comprender para gran parte de los ciudadanos. Por ello, más adelante se mostrarán los estudios y propuestas de modernización del lenguaje que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años en el estado español.

Por otro lado, en este trabajo se analizará el empleo del lenguaje jurídico por los medios de comunicación (prensa escrita y digital, radio, televisión y agencias de noticias) para tratar de determinar si se produce una adecuada transmisión de la realidad de los procesos judiciales y de la labor de quienes intervienen en la Administración de Justicia.

Este trabajo parte de la base de que una utilización correcta del lenguaje jurídico en los medios de comunicación es esencial para el conocimiento y la valoración de la Administración de Justicia por parte de la opinión pública. Los ciudadanos tienen derecho no sólo a conocer las resoluciones que reflejan los criterios de decisión de los jueces sino que también tienen derecho a comprenderlas.

Por último, en este trabajo se realizará un análisis de diferentes noticias donde se mostrará el uso del lenguaje jurídico por los medios de comunicación, dejando claro que la labor de una adecuada transmisión de los mensajes a la sociedad concierne, sin duda, a los medios de comunicación.

LABURPENA:

Lan honen ardatza hizkera juridikoa eta hizkera horren gaur egungo arazoak aztertzea da. Helburua da ulertzea zer den hizkuntza juridikoa eta hizkuntza horrek eremu judizialean sortzen dituen gatazkak, eta, orobat ulertzea komunikabideek hizkera horren erabileran eta transmisioan duten eragin handia.

Lan honen jatorria honako hau da: hizkuntza juridikoa espezialitate hizkuntza bat da, zenbait ezaugarri eta berezitasun dituena, eta, ondorioz, zaila da ulertzea herritar askorentzat. Hori dela eta, aurrerago, Espainiako estatuan azken urteotan hizkuntzaren modernizazioari buruz egin diren azterlanak eta proposamenak azalduko dira.

Bestalde, lan honetan, komunikabideek (prentsa idatzia eta digitala, irratia, telebista eta albiste-agentziak) hizkuntza juridikoa nola erabiltzen duten aztertuko da, prozesu judizialen errealitatea eta Justizia Administrazioan esku hartzen dutenen lana behar bezala transmititzen den zehazteko.

Lan honen oinarria da komunikabideetan hizkera juridikoa behar bezala erabiltzea funtsezkoa dela iritzi publikoak Justizia Administrazioa ezagutu eta balioesteko. Herritarrek epaileen erabaki-irizpideak islatzen dituzten ebazpenak ezagutzeko eskubidea izateaz gain, haiek ulertzeko eskubidea ere badute.

Azkenik, lan honetan hainbat albisteren analisia egingo da, komunikabideek hizkera juridikoa nola erabiltzen duten erakusteko. Argi dago mezuak gizarteari behar bezala helarazteko lana komunikabideei dagokiela, zalantzarik gabe.

SUMMARY:

This work focuses on the study of legal language and its current problems. For this, the work is structured in such a way that it is understood, not only what the legal language is and the conflicts it generates in the judicial sphere, but also the great influence of the media in its use and transmission.

The origin of this work is due to the fact that legal language is a specialty language that has certain characteristics and peculiarities that make it difficult to understand for a large part of the citizens. For this reason, the studies and proposals for the modernization of the language that have been carried out over the last few years in the Spanish state will be shown later.

On the other hand, this work will analyze the use of legal language by the media (written and digital press, radio, television and news agencies) to try to determine if there is an adequate transmission of the reality of judicial processes and the work of those who intervene in the Administration of Justice.

This work is based on the fact that a correct use of legal language in the media is essential for public opinion to understand and assess the Administration of Justice. Citizens have the right not only to know the decisions that reflect the judges' decision criteria, but they also have the right to understand them.

Finally, in this work an analysis of different news will be carried out where the use of legal language by the media will be shown, making it clear that the work of an adequate transmission of messages to society undoubtedly concerns the media. Communication.

ÍNDICE

1. Introducción
2. Lenguaje jurídico
 - 2.1 ¿Qué es el lenguaje jurídico?
 - 2.1.1 Variedades de la lengua: lenguajes de especialidad (lenguaje jurídico)
 - 2.1.2 Derecho y lenguaje: La importancia del lenguaje en el derecho
 - 2.1.3 ¿Qué es el lenguaje jurídico?
 - 2.2 Características del lenguaje jurídico
 - 2.2.1 Características generales comunes
 - 2.2.2 Características del lenguaje jurídico
 - 2.2.3 Características del lenguaje jurídico escrito
 - 2.2.4 Características del lenguaje jurídico oral
3. Conflictos de comprensión del lenguaje jurídico
 - 3.1 Introducción
 - 3.2 Formación lingüística de los abogados
 - 3.3 La comunicación entre los abogados y sus clientes
 - 3.4 Derecho a comprender
 - 3.5 Búsqueda de un lenguaje jurídico más inteligible
 - 3.6 Conclusiones

4. Los medios de comunicación

4.1 Introducción

4.2 Los medios de comunicación y su lenguaje

4.3 Los medios de comunicación y la realidad criminal

4.4 Lenguaje jurídico en los medios de comunicación

4.5 Análisis

4.5.1.a

4.5.2.b

4.5.3.c

4.5.4.d

4.5.5.e

4.5.6.f

4.5.7.g

4.5.8.h

4.6 Conclusiones

5. Conclusiones Generales

6. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

El lenguaje es el medio por el cual los seres humanos nos comunicamos. Desde el origen, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse para ser parte de la sociedad.

Para que exista una verdadera comunicación deben concurrir ciertos elementos de la comunicación humana: emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto.

Estos elementos se encuentran en cualquier lenguaje, así como en el ámbito legal, del cual surge el lenguaje jurídico.

El lenguaje jurídico español, al igual que el de muchos países, está lleno de fenómenos léxicos, gramaticales y discursivos que dificultan la lectura y comprensión de los textos jurídicos, como sentencias, autos, resoluciones o leyes. Esto supone un gran inconveniente tanto para los juristas como para la ciudadanía.

Como muestra uno de los informes realizados por la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico (Modernización del lenguaje jurídico : 2), el lenguaje jurídico que se utiliza actualmente en España resulta incomprensible para la mayoría de los ciudadanos.

Esto genera que, en numerosas ocasiones, ni siquiera sepamos cuáles son algunas de nuestras obligaciones como ciudadanos o aquellos actos penados por ley.

Los medios de comunicación por su parte, dedican en sus páginas multitud de espacio físico a las noticias jurídicas. Cómo se comunican esas noticias importa, tanto en la forma como en el fondo.

En 1981, el Consejo General del Poder Judicial mencionó la necesidad de crear gabinetes de comunicación para normalizar la salida de datos de los Tribunales. Esto se debe a que la forma de transmitir las noticias puede influir, en ciertos casos, en el fondo del asunto.

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar el lenguaje jurídico y los problemas de comprensión que surgen en el ámbito jurídico, y además, centrarnos en algunos objetivos y finalidades de los medios de comunicación a la hora de transmitir noticias jurídicas que entrañan hechos delictivos. Todo ello, con el objetivo de lograr mostrar los problemas de los ciudadanos, por un lado, a la hora de comprender asuntos del ámbito jurídico relacionados directamente con el lenguaje jurídico, y por otro lado, aquellos problemas que generan los medios de comunicación cuando tratan de transmitir noticias debido a las formas y medios que emplean para ello.

2. LENGUAJE JURÍDICO

2.1. ¿QUÉ ES EL LENGUAJE JURÍDICO?

En este apartado se van a analizar las variedades en el ámbito lingüístico debido a que cualquier lengua como la que nos ocupa, el español, presenta diferencias por determinadas circunstancias. En segundo lugar, se mostrará la relación que existe entre el derecho y el lenguaje para explicar la importancia de éste con el primero. Por último se intentará lograr establecer una definición que logre explicar qué es el lenguaje jurídico a través de distintas interpretaciones de varios autores.

2.1.1. VARIEDADES DE LA LENGUA: LENGUAJES DE ESPECIALIDAD (LENGUAJE JURÍDICO)

El español es una lengua homogénea e histórica con proyección mundial. El español, al igual que otras lenguas, se extiende por todo el mundo presentando diferencias según la situación geográfica, sociocultural o situacional. Esas diferencias conforman la variedad o pluralidad lingüística.

Muchos autores han hablado sobre las variedades en el ámbito lingüístico. Ignacio Bosque (1999 : 160 y ss.) menciona que una variedad es:

“Cada uno de los conjuntos definidos de rasgos peculiares que caracterizan el uso de una lengua por parte de unos y otros grupos de hablantes en virtud de factores de distinto tipo. Estas variedades son en realidad muchas y muy diferentes.... Aunque pueden ser muchos (los factores de diversificación), es habitual señalar como fundamentales los cuatro siguientes: la evolución histórica, la separación geográfica, los condicionamientos socioculturales y la situación comunicativa. Cada uno de estos factores o grupos de factores da lugar a variedades diferentes de una misma lengua.”

Para otros autores como Hudson (1982), una variedad lingüística es “una manifestación del fenómeno llamado lenguaje que se define como un conjunto de elementos lingüísticos de similar distribución social.”

Otra definición más concreta es la del autor Ferguson (1971) que define el término variedad como “un conjunto de patrones lingüísticos lo suficientemente homogéneos como para ser analizado mediante técnicas lingüísticas de descripción sincrónica; tal conjunto estaría formado por un repertorio de elementos suficientemente extenso y podría operar en todos los contextos normales de comunicación.”

Por lo tanto, es posible decir que la variedad lingüística, son conjuntos de elementos o modelos lingüísticos asociados a una serie de factores de tipo externo como pueden ser las áreas geográficas a las que pertenecen, factores situacionales o socioculturales.

La disciplina que se ocupa del estudio sobre las distintas variedades lingüísticas, es la sociolingüística. Estudia las relaciones que existen entre la lengua y la sociedad, en el contexto sociocultural.

Atendiendo al nivel sociocultural, la edad y el sexo, se encuentran las variedades diastráticas, donde el hablante muestra el grado de conocimiento que posee. La forman el nivel alto o culto, en el que el hablante utiliza recursos elaborados; el nivel medio o estándar, donde se muestra un conocimiento medio sobre la lengua; y el nivel bajo o vulgar, en el que el hablante no sabe o no tiene un conocimiento adecuado o correcto.

Por otro lado, existe la variedad que atiende a la historia de la lengua y a su evolución. A esta variedad se la denomina diacrónica. En ella se realiza un estudio de cómo ha ido evolucionando la lengua y el proceso por el que ha pasado hasta llegar a lo que hoy se conoce.

Además, se encuentra la variedad diatópica. Esta depende de la situación geográfica en la que se aprende una lengua y por ello es la que más problemas puede ocasionar a la hora de la enseñanza.

Por último, se encuentran las variedades funcionales o diafásicas. Son aquellas que aparecen por un cambio de estilo o de registro. Según el grado de formalidad, del lugar en el que el hablante se encuentre, de la persona con la que esté manteniendo una conversación, las circunstancias, los sentimientos o la actitud. Como ya hemos comentado, esta variedad también se conoce como «funcional» y esto es porque, dependiendo del contexto comunicativo en el que nos encontremos, podemos usar la lengua de un modo u otro.

Esta variedad tiene en cuenta la situación de la comunicación. Esos cambios que se realizan a la hora de hablar y al usar el lenguaje dependiendo del momento, es lo que se conoce como variedad diafásica.

Uno de los puntos más decisivos en esta variedad es el grado de formalidad que se le da al discurso. Esto viene dado por aspectos sociales como la confianza, la familiaridad, el respeto, etcétera. Son los hablantes los que escogen cuál será el registro de la lengua más adecuado según la situación comunicativa en la que se encuentren.

En este sentido, se diferencian distintos registros de la lengua que tienen que ver con la variedad diafásica. Aunque no existe aún un acuerdo común sobre cuántos registros existen, de forma genérica se diferencian estos:

- Registro culto o formal: se suele usar este registro entre personas que no se conocen demasiado o entre contextos más profesionales o académicos. Se caracteriza por el empleo de un léxico elevado, la ausencia de vulgarismos y se evitan las incorrecciones tanto gramaticales como ortográficas.
- Registro coloquial: es ese registro que se usa en entornos familiares y de confianza, en ambientes más relajados y donde hay alguna relación entre los hablantes.

- Registro vulgar: este registro sí que está asociado con el nivel sociocultural del hablante y es el registro que usan las personas con menor conocimiento del idioma. Esto hace que se lleve a cabo un uso incorrecto de la lengua debido a la falta de conocimientos en este sentido.
- Jerga: hacen referencia a un tipo de lenguaje que se usa en contextos comunicativos muy específicos. Dependiendo del grupo social en el que nos encontremos, podemos observar que se usa una jerga determinada y que cuenta con un léxico propio y que solo se entiende dentro del grupo social.

2.1.2. DERECHO Y LENGUAJE : LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL DERECHO

El derecho y lenguaje son dos términos que guardan una estrecha relación debido a que la principal herramienta de la que dispone el derecho es la palabra o el lenguaje, tanto de forma oral como de escrita.

Al derecho se le da forma mediante el lenguaje. Es imposible crear un código de conducta que establezca cuáles son nuestras obligaciones o qué determinados actos podemos o no realizar, sin la ayuda de un lenguaje formado por palabras, gestos o signos.

Todos los ordenamientos jurídicos y por lo tanto, todas las normas jurídicas que los componen, se dictan por medio del lenguaje y se plasman a través de las palabras. Incluso aquellas costumbres son creadas a través del lenguaje debido a que para su constitución es necesario que el pensamiento sea compartido y para ello es necesario el uso del lenguaje, ya sea por medio de las palabras, gestos o signos.

Además, en relación a la creación de las leyes es necesario que tengan una adecuada redacción para no dar lugar a ambigüedades o interpretaciones totalmente contrapuestas. Por ello, las normas deben de ser claras, precisas y concisas para que el mensaje pueda llegar a todos los ciudadanos y además, es necesario que las leyes sean completas y coherentes para que no surjan contradicciones o lagunas. Sin embargo, no existe una ley perfecta que no contenga errores, que todo ciudadano logre comprender o que no dé lugar a interpretaciones dispares.

En el ámbito del derecho, cada parte interpretará una norma como más le favorezca. Esto se debe a que es importante saber dar un buen uso al lenguaje, debido a que muchas veces tendrá más éxito en un juicio el que mejor se maneje con las palabras y sea capaz de persuadir y convencer de que su interpretación es la correcta al juez, al tribunal o al jurado.

Anteriormente hemos mencionado cómo no es posible hablar del hombre sin mencionar el lenguaje, y en el ámbito del Derecho sucede lo mismo.

En el Derecho, a los expertos en el conocimiento y en el manejo de las leyes además de denominarlos juristas también se les conoce como «letrados», palabra que sugiere que mantienen una relación estrecha con las letras, las palabras y los textos.

La ley se crea mediante palabras que expresan un mandato y es a través de esas palabras por las cuales los ciudadanos comprenden su contenido obligatorio.

Esas palabras no son escogidas al azar, sino de manera precisa debido a que lo que se busca con esas palabras es crear un modo de actuar. Además, es importante que esas palabras respeten el principio de igualdad, pues se exige que el texto de la ley sea idéntico para todos impidiendo cualquier tipo de discriminación.

Así pues, como consecuencia del uso de las palabras se establece una relación causal entre los hechos y los efectos jurídicos.

El lenguaje en el Derecho es dinámico no estático, debido a que el lenguaje debe girar en torno a la sociedad actual. Es por esto que no pueden existir normas inalterables y perpetuas porque afectarían al objetivo del Derecho.

Es fundamental llevar a cabo la actividad de renovar el Derecho, escogiendo palabras nuevas para adaptar el Derecho a la sociedad actual.

2.1.3. ¿QUÉ ES EL LENGUAJE JURÍDICO?

El hombre es un ser de palabras porque como decía Octavia Paz "la palabra es el hombre mismo. Sin ellas, es inasible.", es decir, que no se puede hablar del hombre sin hacer referencia al lenguaje.

En muchas ocasiones encontramos la denominación lenguaje jurídico-administrativo, entendiendo que existe una conexión importante entre ambos campos.

Con respecto a esta cuestión, de Miguel (2000 : 4º párr.) admite lo siguiente:

"La frontera entre lenguaje jurídico y administrativo no está, pues, bien delimitada y hasta cierto punto el primero puede considerarse una clase especial del segundo. En consecuencia, ambos lenguajes suelen estudiarse de forma conjunta, decisión que parece sensata, puesto que comparten los recursos lingüísticos (gramaticales y léxicos) y coinciden también en los factores extralingüísticos que los caracterizan (el canal, el emisor, el receptor y la finalidad o intención comunicativa)."

Por su parte, Jacinto Martín Martín (1996 : 2) define el lenguaje jurídico como:

"el que atañe al derecho. Comprende, pues, la definición más restringida de lenguaje legal, que se ha entendido como «la lengua escrita en los textos de leyes y decretos, y en los documentos oficiales en general»."

Según estos autores, existiría cierta vinculación entre ambos terrenos del derecho. Sin embargo, Sánchez Alonso (2017 : 9) define el lenguaje administrativo como “el uso de la lengua que ha ido creando la burocracia administrativa para la gestión de los servicios públicos en sus relaciones internas y externas”. Y, en relación con el lenguaje jurídico, afirma lo siguiente:

“El lenguaje administrativo está inevitablemente influido por los lenguajes denominados del poder, categoría a la que pertenecen tanto el lenguaje de las leyes (lenguaje legal), el lenguaje de los jueces (lenguaje forense) como en general el lenguaje derivado de los estudios doctrinales sobre el derecho (lenguaje jurídico). Su influjo llena los documentos administrativos de términos jurídicos especializados, de expresiones latinas o arcaísmos que estos lenguajes han heredado desde siglos y cuyo uso constante ha convertido en modelos de redacción inalterables y hasta venerados.”

Como vemos, hay autores que no separan lo jurídico de lo administrativo, otros que categorizan el lenguaje jurídico como una subclase del administrativo y, otros, en cambio, que lo delimitan y señalan la influencia de uno sobre el otro.

Con respecto al lenguaje jurídico, muchos han sido los autores que se han interesado por él debido a las características tan propias y llamativas que ofrece, pero, además, también por la importancia que posee en el contexto histórico, social y cultural.

Para establecer una definición o un concepto final, podríamos decir que el lenguaje jurídico es una variedad del idioma que se utiliza tanto en los textos legales como en los producidos por los abogados, jueces, magistrados y otros colaboradores de la justicia. Puede emanar del poder legislativo que es el encargado de elaborar las normas legales; del poder ejecutivo, encargado de ejecutar lo que el poder legislativo le entrega; o del poder judicial que aplica e interpreta las normas.

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JURÍDICO

El lenguaje trasladado al ámbito jurídico implica la aceptación de unos caracteres propios. Por ello, es necesario analizar las características del lenguaje jurídico desde el plano escrito y el oral, sabiendo que existen unas características generales que afectan tanto al primero como al segundo.

2.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES COMUNES

Según Cazorla Prieto (2007 : 1), “el lenguaje jurídico es un lenguaje propiamente demiurgo y arcano.” Esto significa que el lenguaje jurídico es un lenguaje especial en el cual se usan palabras que fuera del contexto del Derecho no tienen existencia por sí mismas. Los creadores de estas palabras son los legisladores, jueces o incluso profesores ya que ellos están dotados de unas capacidades y conocimiento relativos al Derecho, a diferencia de cualquier ciudadano para el cual no está al alcance su utilización porque no puede ser entendido ni utilizado con propiedad.

El lenguaje jurídico es un lenguaje conservador con tendencia al inmovilismo lo que conlleva una dificultad para innovar y adaptarse a la sociedad pero además, su carácter solemne y tradicional, dificulta su comprensión a cualquier ciudadano dotado de unas capacidades y conocimientos básicos.

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JURÍDICO

Para Morales Pastor (2004) son tres los aspectos que caracterizan el lenguaje jurídico: los rasgos léxico-semánticos, morfosintácticos y de estilo. Además, Morales Pastor destaca seis elementos caracterizadores:

1. Pretensión de objetividad y neutralidad, que trae consigo impersonalización y uso de construcciones retóricas y de cultismos.
2. Funcionalidad, como búsqueda de la comunicación eficaz.
3. Precisión y coherencia, con eliminación de los significados connotativos que implican ambigüedad, centrándose en términos denotativos o indicativos.
4. Claridad, que implica la presencia de definiciones, pormenorizaciones y excepciones.
5. Normatividad, predominando la función conativa o de mandato, usándose el imperativo presente y el presente de subjuntivo con valor de mandato.
6. Tendencia formalizadora, a través del estilo formulario, las abreviaturas y fórmulas fraseológicas y léxicas.

Es posible estudiar el lenguaje en relación con el acto del habla, el conocimiento del mundo, el uso de los hablantes y las circunstancias de la comunicación. En este sentido, el lenguaje del Derecho puede analizarse desde un punto de vista emotivo ya que está relacionado con un significado afectivo.

Una forma de conocer a una persona es observando cómo habla, debido a que el lenguaje no engaña, ya que por mucho que el hablante controle sus emociones tarde o temprano salen a la luz y muestran cómo se siente realmente. De ahí proviene la expresión: "In lingua, veritas."

Este análisis del lenguaje a través de las emociones depende del contexto, ya que algunas formas emotivas sólo tiene sentido en un país determinado. También depende de los hábitos de la persona que los emplea, así como de los hábitos de la persona que los escucha.

Las palabras emotivas son aptas tanto para expresar sentimientos de la persona que habla, como para provocar sentimientos en la persona que escucha. En el ámbito jurídico sucede lo mismo, debido a que existen palabras que transmiten y provocan emociones.

Por otro lado, la política y el lenguaje están íntimamente relacionados. Platón ya mencionó que existe un lenguaje propio de la democracia, otro de la oligarquía y otro, a su vez, de la monarquía. Es por eso que los distintos sistemas políticos pueden ser conocidos también por su lenguaje ya que a través del uso pueden deducirse las distintas corrientes existentes en ellos.

Existen expresiones ideológicas no sólo en el lenguaje común sino también en el ámbito jurídico. Ese componente ideológico resulta más notable en la legislación, en las leyes, no en la doctrina ya que su objetivo no es ejercer una influencia ideológica sobre los ciudadanos sino describir relaciones jurídicas.

En el lenguaje jurídico es habitual el uso impersonal debido a la inexistente expresión del autor de las normas jurídicas. En el periodismo cada noticia o artículo lleva normalmente el nombre del autor. Sin embargo, en el Derecho no es posible saber quienes han elaborado las normas jurídicas ya que no importa tanto el quién como el qué. El Libro de estilo de la Justicia (2017 : 4) indica que por ello son frecuentes:

1. El uso de las formas verbales impersonales y pasivas reflejas.
2. El empleo casi exclusivo de la tercera persona, evitando la referencia al emisor y al destinatario.
3. Las referencias a los actores que intervienen a través de sus funciones.
4. La multiplicación de construcciones nominales, especialmente de sustantivos derivados de verbos, favorece asimismo la impersonalización ya que suelen evitar la presencia del sujeto.

Por último, el tono del lenguaje jurídico ostenta un carácter imperativo; oraciones enunciativas imperativas en tercera persona del singular y uso de gerundio y perífrasis de obligación. El objetivo es transmitir mandatos directamente a los ciudadanos a través de oraciones impersonales.

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JURÍDICO ESCRITO

En el Derecho las palabras tienden a la escritura debido a que es la vía a través de la cual se fijan los derechos y obligaciones de los ciudadanos, por ello en el lenguaje escrito es donde se puede observar con mayor fuerza su especialidad.

En este sentido se ha producido una evolución histórica, desde los primeros testimonios históricos de la escritura que eran textos jurídicos de leyes hasta llegar a la técnica legislativa de hoy en día que es la codificación; la nueva ordenación legal.

Los profesionales del Derecho, a la hora de escribir, deben de poner de manifiesto que están en posesión de las herramientas de un lenguaje propio dando una imagen de elegancia y nitidez, a la vez que deben de cubrir la necesidad de fundamentar y justificar todas las expresiones de ideas y pensamientos por medio del lenguaje jurídico.

El Libro de estilo de la Justicia (2017 : 8) recoge los principales rasgos de estilo que caracterizan el lenguaje jurídico:

- El lenguaje jurídico, especialmente el que se desarrolla en escritos como las sentencias, presenta con bastante frecuencia un estilo acumulativo, de párrafos largos llenos de enumeraciones, perífrasis, circunloquios, frases hechas, redundancias...
- En ocasiones, el estilo es desordenado, confuso, monótono, farragoso y de difícil legibilidad.

- Abundan las expresiones explicativas, guiadas por un deseo obsesivo de matizar bien los significados.
- Proliferan los incisos que aluden a disposiciones legales. Su finalidad es lograr mayor precisión y fundamentar las justificaciones y los argumentos. Pero cuando la referencia legal aparece *in extenso* y además se incluye el texto citado literalmente, el punto se alarga de forma ilimitada y es causa de que los textos resulten abstrusos e incomprensibles.
- Son comunes los párrafos largos y complejos, formados por una maraña de oraciones coordinadas y subordinadas.
- Su estilo culto puede resultar distante y frío a causa de la abundancia de tecnicismos y latinismos, así como por su compleja sintaxis.
- Optan por una prosa conservadora y arcaizante, que se manifiesta en su léxico, en sus expresiones estereotipadas y en formas verbales obsoletas, como el futuro del subjuntivo.
- Se recurre a gritos retóricos y formularios de otros tiempos, que, por ser obsoletos y pomposos, dotan al lenguaje jurídico de un tono ritual, muy alejado de la forma de expresarse los ciudadanos.
- Abundan los hipérbatos, las expresiones redundantes. Se registran muchas repeticiones sinonímicas, prolifera el uso de adjetivos encadenados y las construcciones reiterativas con carácter enfático.

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JURÍDICO ORAL

En las últimas décadas la oratoria jurídica ha ido perdiendo importancia a diferencia de la relevancia que tenía en momentos históricos donde la retórica y la oratoria eran asignaturas elementales y obligatorias. Hoy en día debido a esta desaparición, muchos juristas desconocen estas técnicas que pueden llevar a ser claves en cualquier proceso judicial.

El Libro de estilo de la Justicia (2017 : 5 y ss.) señala rasgos morfológicos y sintácticos del lenguaje jurídico oral:

- Características verbales: Uso del futuro del subjuntivo, abundancia del imperativo sin referencia al agente, uso del futuro con carácter de obligación, abuso de gerundio especificativos, empleo del presente del indicativo con valor atemporal.
- Los sufijos más empleados para generar nuevos nombres: - on / - ión, - dad, - encia, - miento.
- Los sufijos más comunes para la creación de adjetivos: - ado, - al, - ante, - ario, - ivo, - orio.
- Elementos prepositivos que se emplean con frecuencia: ante-, auto-, contra-, des-, extra-, in-, pre-, re-.

Existe una tendencia a mezclar el lenguaje jurídico oral con el escrito; decir el Derecho como se escribe. Esto conlleva que las exposiciones o argumentaciones por parte de letrados, jueces o magistrados en otros, sean lineales y tradicionales no permitiendo improvisaciones, un mecanismo que haría que en ocasiones el lenguaje jurídico oral resultara más ameno.

La Abogacía española¹, señala las siguientes características a tener en cuenta en el lenguaje jurídico oral:

1. Tener claros los objetivos del discurso, prepararlo de manera suficiente y al exponerlo, hacerlo de manera ordenada y sin perder de vista el objetivo.
2. Prestar atención al lugar y a la persona a la que se dirige. Si se está en un tribunal con un lego en Derecho, es necesario explicarle lo que cree que puede no entender. Si el receptor es un jurista, hablar técnicamente, pero de modo correcto.

¹ Abogacía española

<https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/como-el-lenguaje-juridico-puede-comunicarse-corre ctamente-sin-perder-ni-tradicion-ni-precision/>

3. Evitar los defectos que se trasladan desde lo escrito al ámbito oral, en especial, las parrafadas. Es un error realizar discursos largos e interminables, la memoria a corto plazo retiene brevemente.
4. Vocalizar y entonar evitando el tono uniforme y monótono, con una velocidad moderada para su disertación.
5. Ensayar, intentando conocer previamente el lugar de la exposición oral y practicar hasta ganar seguridad y así evitar situaciones de incertidumbre.
6. Los gestos y los movimientos son importantes, así como la cortesía, la buena educación, la puntualidad y la indumentaria.
7. Ensayar y practicar para conseguir la claridad necesaria y la naturalidad.

3. CONFLICTOS DE COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO

3.1. INTRODUCCIÓN

A la hora de hablar del lenguaje jurídico podemos referirnos al lenguaje escrito que se puede encontrar en los textos jurídicos que se redactan en un proceso judicial; demandas, sentencias, autos, etc, o resoluciones y contratos administrativos que se pueden encontrar en los procedimientos administrativos. Por otro lado, podemos referirnos al lenguaje que se emplea entre profesionales en el ámbito jurídico, tanto en los tribunales como en otro tipo de instituciones o lugares relacionados con el derecho.

Sin embargo, existe una tercera opción que es el lenguaje oral que emplean los profesionales del derecho durante el ejercicio de la profesión. Una buena comunicación es crucial en este ámbito, ya sea oral o escrita, para los juristas y profesionales del ámbito jurídico.

La comunicación tiene gran relevancia tanto en el ámbito privado; en las negociaciones o contrataciones, como en el ámbito judicial ante los jueces y tribunales, pero además, en la relación privada con el cliente.

3.2. FORMACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS ABOGADOS

A lo largo de la enseñanza primaria y secundaria se imparten clases de la lengua española. Sin embargo, el nivel lingüístico de los alumnos de Derecho cuando entran a la universidad no es lo suficientemente elevado para entender a la perfección los textos jurídicos aún habiendo superado las pruebas previas de ingreso.

Alberto Gómez (2009) señala que “la enseñanza de la lengua... falla desde la enseñanza primaria, sigue fallando en la secundaria y esos fallos no se remedian en la universidad”.

A diferencia de otras disciplinas, un estudiante de derecho no tiene una base ni unas mínimas nociones de derecho cuando llegan a la universidad. Su conocimiento sería conveniente para todos los ciudadanos, de forma que, al menos, conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos y para ello habría que empezar desde el colegio.

Hay ciertas universidades en España que, conscientes de este problema, han incluido en sus planes de estudio ciertas asignaturas relacionadas con las capacidades argumentativas y de redacción. Son competencias que deben desarrollar los estudiantes a lo largo de la carrera en cuanto al nivel comunicativo y lingüístico para desenvolverse en la sociedad actual.

En la Universidad del País Vasco, están incluidas en el cuarto curso tres asignaturas relativas al lenguaje jurídico: Normas y uso de la lengua vasca, Comunicación en euskera: ámbito jurídico, Técnicas de comunicación y argumentación jurídica, y Técnicas para la elaboración de trabajos y documentos jurídicos. Estas asignaturas, al igual que en otras universidades, son optativas e incluso pueden valer menos créditos que otras asignaturas.

Por lo tanto, a estas asignaturas que buscan que el estudiante de derecho desarrolle competencias comunicativas y un buen dominio del lenguaje no se les da la importancia que deberían aún sabiendo que esto conlleva consecuencias negativas en el trabajo de los juristas y que se observa tanto en sus escritos como intervenciones. Es por eso que, ciertos colegios de abogados y algunos despachos han elaborado libros de estilo para orientar a los juristas y futuros abogados y establecen pautas a seguir a la hora de redactar textos jurídicos.

3.3. LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS ABOGADOS Y SUS CLIENTES

Tres son los ámbitos en los cuales es importante una buena comunicación para un abogado: ante los jueces y tribunales, en negociaciones y contrataciones, y con el cliente.

Es de gran importancia para un abogado saber diferenciar estos ámbitos porque es muy distinto el lenguaje que se usa en cada uno de ellos.

Por lo general, los abogados saben cómo deben dirigirse a un juez en los tribunales, la manera en la que deben expresar sus argumentos y cómo deben de usar un lenguaje más técnico debido a que en las vistas se exigen unas formalidades que todo abogado debe conocer. Sin embargo, no todos los abogados saben como tratar y comunicarse con un cliente.

Cómo consecuencia de que el ciudadano medio no es capaz de comprender los documentos jurídicos debido a su gran carga jurídica y a su lenguaje tan técnico, necesitan la intervención de un abogado. El cliente acude al abogado para que le ayude a solucionar un problema jurídico, pues son los intermediarios entre el ciudadano y la justicia.

En lo relativo a la relación entre el cliente y el abogado, Francesc Domínguez y Iolanda Guiu (2009 : 26-29) indican que es primordial que el cliente se sienta tranquilo, confíe en su abogado y tenga seguridad. Cuando el cliente acude a un abogado busca tranquilidad para abordar el problema y la seguridad de que el abogado va lograr encontrar la solución más beneficiosa para él. Estos mismos autores mencionan que entre ambos deben coexistir valores como la honestidad o el secreto profesional, asegurar la privacidad de la información y ser realista. Está última es fundamental debido a que es importante no crear falsas expectativas y hacerle ver al cliente que en el derecho la verdad es relativa y la decisión del juez no siempre es la más justa.

Una de las claves para lograr una buena comunicación entre el abogado y el cliente es emplear un lenguaje sencillo y comprensible para que el cliente entienda todo lo que el abogado intenta explicarle y así generar una sensación de tranquilidad y de confianza. Si el abogado utiliza el mismo lenguaje lleno de tecnicismo que usa en los tribunales o frente a los jueces y magistrados, se genera una separación entre ambos y propiciará una situación de inseguridad para el cliente quien no entenderá lo que el abogado desea explicarle.

3.4. DERECHO A COMPRENDER

Con la llegada de las nuevas tecnologías, avances científicos... se ha creado una sociedad muy distinta a la que se conocía y que, sin embargo, sigue rigiéndose por normas elaboradas hace décadas.

Por ello, uno de los objetivos en el ámbito jurídico es instaurar una justicia acorde a la sociedad actual, que sea capaz de afrontar los nuevos problemas y preocupaciones y que sea más accesible para la ciudadanía.

Uno de los grandes problemas del Derecho, es que el lenguaje jurídico que se utiliza, en ocasiones resulta incomprensible para los ciudadanos. Para una persona que no sea profesional del derecho o no tenga algún tipo de conocimiento acerca de la materia, le supone un gran esfuerzo entender lo que se dice en una norma o una sentencia, por el uso de un lenguaje técnico y especializado como es el lenguaje jurídico.

Esta dificultad para comprender los textos jurídicos, puede suponer que el ciudadano vea afectados sus derechos personales o patrimoniales debido a que no logre entender el contenido de una resolución judicial. En relación a esto, en un artículo suyo Jorge Maestre (2015) menciona que: "Este enmarañamiento del lenguaje legal genera inseguridad jurídica porque, en el ámbito judicial, nos deja indefensos

y dependientes de nuestros representantes legales. Somos incapaces de tomar decisiones fundamentales, de salvaguardar nuestros intereses o de asumir nuestra responsabilidad sin comprender lo que se nos dice.”

Como consecuencia de todo lo anterior, surgió el Derecho a Comprender cómo una garantía de la que disponen los ciudadanos frente a los textos jurídicos ininteligibles para lograr entender las normas y las resoluciones judiciales que les afectan.

El origen de este derecho data de finales del siglo XX en los países de habla anglosajona, pero no fue hasta el año 2002 cuando se instauró oficialmente en España con la entrada en vigor de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

Según el preámbulo de la Carta, su finalidad es la de “conseguir una justicia moderna y abierta a los ciudadanos” y destaca “la importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.”

El Derecho a Comprender se regula en los artículo 5° a 7° que dicen:

“5. El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

6. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho.

7. El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.”

Con la inclusión de estos artículos se pretende que se utilice un lenguaje más sencillo y comprensible para las personas que son parte de un proceso, incluyendo cada fase del proceso judicial en la que intervinieran los ciudadanos.

La Carta añade que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía “adoptarán las disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos en esta Carta” y que el Congreso de los Diputados “llevará a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de esta Carta”.

El Derecho a Comprender no es un derecho dispositivo, es decir, su aplicación no puede quedar al arbitrio de los jueces y magistrados, sino que es imperativo y obligatorio para éstos, ya que es exigible su cumplimiento por parte de los ciudadanos. Aún así, en la práctica los ciudadanos carecen de los medios para exigir su cumplimiento.

Por lo tanto, el Derecho a Comprender es un derecho exigible por los ciudadanos debido a que los órganos e instituciones quedan obligados a su cumplimiento, como establece la Carta de Derechos de los Ciudadanos.

3.5. BÚSQUEDA DE UN LENGUAJE JURÍDICO MÁS INTELIGIBLE

Cómo consecuencia de la entrada en vigor de la Carta de Derechos de los Ciudadanos, y del reconocimiento del Derecho a Comprender, se llevó a cabo un intento de reformular el lenguaje jurídico y lograr adaptarlo a las necesidades y derechos de los ciudadanos, es decir, a una modernización del lenguaje jurídico.

En este sentido, uno de los informes de la Comisión para la Modernización del Lenguaje menciona que: “La modernización de la justicia va mucho más allá del uso intensivo de las nuevas tecnologías... una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender.”²

El mismo informe de la Comisión para la modernización del Lenguaje indica que:

² Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico (2011)
<http://www.upv.es/entidades/VRSC/info/U0711342.pdf>

“las quejas formuladas ante el servicio de atención al ciudadano del Consejo General del Poder Judicial indican que el lenguaje jurídico es críptico y oscuro, y que resulta incomprensible para el ciudadano”.³

Por ello, con la aparición de la Carta, surgió un movimiento a favor del desarrollo de un lenguaje jurídico moderno y más comprensible para todos los ciudadanos.

Este movimiento para la modernización del lenguaje jurídico comenzó con la creación de un órgano ad hoc en el año 2003; la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. Su finalidad era desarrollar un lenguaje jurídico moderno y hacerlo más comprensible.

Tras esto, en el año 2005 se redactó el Plan de Transferencia Judicial⁴ que incluía un apartado denominado “Modernización del lenguaje jurídico”. Este Plan señala que sus objetivos son: “proceder al impulso y entrada en funcionamiento de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico” y “alcanzar la aspiración de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia consistente en obtener una Justicia comprensible”.

A finales del año 2008 se redactó el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia⁵ que incluía unos objetivos a alcanzar entre los años 2009 - 2012 respecto a la modernización de la justicia. Esos objetivos respondían a la intención de lograr una justicia más accesible y transparente para los ciudadanos, estableciendo para ello un lenguaje más comprensible.

Más tarde, a finales del año 2009, se constituyó de nuevo la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico pero en esta ocasión, planteándose objetivos a cumplirse en un plazo determinado para que no ocurriese lo mismo que con la anterior comisión.

Para ello, el Consejo de Ministros encargó a la comisión la realización de un informe de recomendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del Derecho, en el plazo de un año a contar desde la primera reunión.

³ Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico (2011)
<http://www.upv.es/entidades/VRSC/info/U0711342.pdf>

⁴ Plan de Transparencia Judicial.
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/Pagina1Columna1Fila/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjL0MjCydDRwN3k0AzA8cgl0sTRwsnlwMLA_2CbEdFADc9sTY!/?itemId=239738

⁵ Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia.
https://icalorca.es/wp-content/uploads/La_Justicia_en_2012.pdf

La Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico realizó el informe en el que reflejaba el incorrecto uso del lenguaje en el ámbito jurídico y la incapacidad de los ciudadanos para comprender los textos jurídicos.

Debido a los nuevos problemas e inconvenientes que han venido surgiendo en los últimos años, la actividad de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico ha descendido e incluso se ha paralizado.

3.6. CONCLUSIONES

En primer lugar, como se ha mencionado anteriormente, el lenguaje jurídico es un lenguaje repleto de especificidades que lo convierten en un lenguaje muy técnico. Esto supone un gran problema para la mayoría de los ciudadanos debido a que es difícil de comprender para ellos en la mayoría de los casos.

A diferencia de otras profesiones, en el derecho y más concretamente en los procesos judiciales, se utiliza un lenguaje cargado de tecnicismos y con estilo que genera una situación de inseguridad para el ciudadano que busca solucionar un problema jurídico. Por ello, es importante que tanto los jueces como los abogados sepan distinguir al receptor y por lo tanto, no utilicen el mismo lenguaje entre ellos y con los ciudadanos.

Este problema se ha tratado de solucionar con la entrada en vigor de la Carta de Derechos de los Ciudadanos, la cual reconoce ciertos derechos a los ciudadanos frente a la justicia. Entre estos derechos se encuentra el derecho a comprender. Debido a que no ha habido avances en esta materia, se puede decir que es un objetivo que queda en manos de los agentes jurídicos, los estudiantes de derecho y las universidades.

Las instituciones deben de seguir impulsando los proyectos acerca de la modernización del lenguaje jurídico para no dejar desprotegido ni desamparado a ningún ciudadano, y para ello deben de poner a disposición de los juristas las herramientas necesarias para cumplir este objetivo.

Los futuros juristas son quienes deben de comenzar a emplear un lenguaje más sencillo y claro, siendo conscientes de la existencia de los derechos de los ciudadanos ante la justicia y de qué es necesario un lenguaje más sencillo acorde con la sociedad actual.

Las universidades por su parte, deberían de tratar de implementar ciertas soluciones para formar a sus alumnos, ya que su trabajo va a depender en gran medida del lenguaje porque es necesario un buen uso de la palabra para desempeñar esta profesión. Además, deben de hacerles conocedores de la existencia del derecho a comprender y de formar no sólo juristas sino también comunicadores, porque el buen jurista no debería ser el que más sabe de derecho, sino el que sabiendo mucho, además es capaz de transmitirlo.

4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

4.1. INTRODUCCIÓN

Los medios de comunicación son los encargados de informar sobre los hechos que suceden a nuestro alrededor.

Los medios de comunicación han asumido la función de foros de expresión y de debate sobre los principales problemas sociales. Seleccionan los acontecimientos que se van a convertir en noticia y establecen las noticias que serán objeto de discusión social. Fomentan este debate a través de artículos de opinión y editoriales que presentan diversos enfoques y perspectivas de análisis y solución de problemas.

Los medios de comunicación son auténticos agentes de control social que reconocen y delimitan el problema social al mismo tiempo que emiten enfoques y perspectivas ante un conflicto.

El trabajo informativo de los medios de comunicación se observa en tres fases: la elección de los acontecimientos que serán noticia, la jerarquización de las noticias según su importancia y la conversión de una noticia en un tema de debate social. Estas tres fases son necesarias porque es imposible transmitir todos los acontecimientos. Esta selección se lleva a cabo a través de algún criterio que suele ser el interés periodístico y particular.

4.2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU LENGUAJE

Los medios de comunicación son un importantísimo canal de difusión de información y cultura. Actualmente, los medios de comunicación son una parte central de nuestras vidas, sobre todo las redes sociales, que sirven como espacio virtual de intercambio constante de ideas e información.

Santiago Peribañez (2017) señala que “las nuevas tecnologías han invadido casi cada rincón de nuestras vidas, alterando por completo el modo en que se producía y se consumía la información.”

Hoy más que nunca los medios de comunicación son la piedra angular de nuestras vidas sociales, una forma habitual y ya totalmente normalizada de percibir e interactuar con la realidad y el resto de personas. Es a través de ellos que los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor cobran sentido e importancia.

Por ello la accesibilidad a la información ya no es un problema, ya que, con las nuevas tecnologías tenemos toda la información que queremos con tan sólo un clic. Sin embargo, cantidad y calidad no siempre van de la mano, es más, nos encontramos en un momento de pobreza en cuanto a la información divulgada por los medios de comunicación.

El periodismo del que somos testigos hoy en las redes sociales, suele dar prioridad al aspecto de divulgación por encima de otros que son igual, o más, importantes. Esto se debe a la obsesión por lograr titulares o el mayor número de clics, y ha supuesto un gran cambio en el lenguaje periodístico que cada vez es más breve y resumido. El titular es el nuevo arma de marketing de los periodistas, el cual debe ser atractivo, breve, conciso y directo.

Tal y como señala Gutiérrez et al (2010 : 276) “la programación está construida para conseguir el mayor número posible de espectadores y para ello los contenidos se banalizan en la búsqueda de valores discursivos que lleguen al mayor número posible de espectadores”, lo que según las autoras, ha llevado a que la sociedad actual no sea la «sociedad de la información» sino la «sociedad del espectáculo».

Jill Abramson, ex directora del New York Times aludió a esta polémica en una entrevista para El Mundo (Pardo : 2015), en la que apuntaba que “la clave es cuánto periodismo de calidad va a haber en un mundo obsesionado por los clicks”.

El problema al que nos enfrentamos hoy en día es cómo depurar y elegir entre toda la información que nos inunda. La abundancia de plataformas de comunicación, de canales, aplicaciones y demás fuentes de información ha llevado a una gran competición entre ellos por conseguir audiencia, lectores y oyentes, lo que ha derivado

en que los medios de comunicación en muchos casos anteponen la cantidad a la difusión de información de calidad.

Por lo tanto, el problema es que no solo estamos inundados por información sino que está es demasiado breve o banal. El receptor será quien deba seleccionar y depurar la información, realizar diversas búsquedas y elegir varias plataformas para comparar y contrastar.

Un estudio de Álvarez Ramos (2015 : 59) sobre los nuevos paradigmas periodísticos explica cómo las plataformas virtuales están cambiando la manera en la que los lectores leen y lo resumen: “La mirada se concentra en títulos y párrafos. Si las primeras palabras no enganchan se pasa de largo. Se mira solo el primer par de palabras. Un titular tiene menos de un segundo de la atención del usuario. Se mira solo un tercio del párrafo que sigue a los titulares en las páginas de inicio.”

La atención del lector es transitoria, y por lo tanto las redacciones se ven obligadas a resumir y a utilizar titulares sensacionalistas con el objetivo de vender. Gran parte de la responsabilidad es del lector y de los medios se están adaptando a estos cambios sociales debido a que finalmente es el lector el que decide qué lee y cómo lo lee.

4.3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA REALIDAD CRIMINAL

Una de las principales cuestiones que ocupa la actividad comunicativa de los medios de comunicación es sin duda el fenómeno criminal. La prensa ha mantenido e incluso incrementado el porcentaje de historias sobre el delito. La televisión y la radio tampoco han prescindido de los crímenes como objeto de comunicación.

El hecho de que los sucesos delictivos aparezcan en el ámbito informativo puede tener un efecto positivo: la visión de ciertos hechos delictivos permite advertir que existe un problema social. No obstante, tras esa imagen se esconde una realidad más negativa: el protagonismo mediático de este asunto se plasma en una información que es

inexacta y adulterada por los intereses particulares de los medios y de aquellos que los controlan.

Los medios de comunicación presentan una realidad criminal distorsionada. Se sobredimensiona la gravedad de ciertos acontecimientos al tiempo que otros hechos delictivos cotidianos son condenados excepcionalmente. No se limitan a reconocer y presentar el problema social, sino que construyen y comunican una imagen virtual que no coincide con la real.

La constante aparición del fenómeno criminal en los medios de comunicación, favorecen la formación o el refuerzo de una conciencia social y personal en torno al delito. Sin embargo, la evolución de la criminalidad revela que no hay motivo suficiente para tanta atención mediática, ni para que haya un incremento de la preocupación social e individual.

La constante transmisión de una realidad criminal distorsionada y la preocupación social e individual influye en la política legislativa, ya que son factores de presión sobre los agentes políticos que se ven obligados a reaccionar de forma inmediata con una ley penal. De esta manera manifiestan su capacidad de actuación y su celeridad a la hora de enfrentarse a los problemas aunque con ello se deje patente el carácter populista y simbólico de esta legislación.

Por todo lo anterior, como señala Escudero, se puede afirmar que «la información no es inocente» (2004 : 81). En primer lugar, porque los medios de comunicación están al servicio de sus propios intereses económicos de cuotas de pantalla. Los objetivos de los medios no sólo se consiguen a través de los procesos de selección de noticias sino que también se obtiene mediante la reducción de la calidad de las noticias, el mantenimiento de agendas uniformes, el flujo de información constante, un modo de comunicación orientado a producir emociones, etc.

En segundo lugar, porque los medios de comunicación no se limitan a transmitir los acontecimientos diarios sino que son instrumentos de persuasión y propaganda, y una manera de hacer política.

En este contexto de búsqueda de incremento de beneficios, los medios de comunicación informan sobre acontecimientos que atraen y divierten a la audiencia. Para ello insisten en lo que cautiva y emociona al público: lo inesperado, lo espectacular, lo morboso, etc. De ahí que la información se concentre en la catástrofe: los delitos, la inseguridad, el terrorismo, la guerra, la enfermedad, el hambre, la miseria, y los desastres naturales.

4.4. LENGUAJE JURÍDICO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre el concepto de lenguaje jurídico y los medios de comunicación, podemos señalar que son conceptos diametralmente opuestos.

Como se ha mencionado en apartados precedentes, el lenguaje jurídico resulta incomprensible para una gran parte de los ciudadanos, además se caracteriza por sus formas arcaicas y su estructura compleja y extensa. Mientras que los medios de comunicación favorecen mensajes breves, párrafos cortos y concisos, con titulares llamativos. Se puede decir que resultan incompatibles.

Hoy en día el poder de difusión de los medios es inmenso, tanto es así que Gutiérrez, Rodríguez y Gallego (2010 : 272) mencionan que se estima que “ el 80% de los conocimientos adquiridos por niños de edades comprendidas entre los 12 y los 15 años provienen de los diferentes medios de comunicación social y particularmente de la televisión y sólo un 20% por medio de la escuela” . Hernán Urrutia (2001 : 12) asegura que los medios de comunicación tienen mayor influencia en lo referido a la difusión cultural y formación lingüística que la acción escolar.

Peribañez (2017) también recoge que “Los jóvenes (20-35 años) ya confían más en la información recibida por estos canales que en la transmitida por periodistas [...] un 65% confía en las conversaciones a través de correo o redes sociales, mientras que

un 48% considera los blogs como una fuente válida. Este porcentaje cae hasta el 44% en el caso de los periódicos y revistas impresas [...] En España, las redes sociales son el segundo medio de referencia entre los jóvenes menores de 35 años, con un 62% sólo tres puntos por debajo de la televisión.”

Queda claro que, sobre todo entre los jóvenes, las redes sociales son la primera opción como fuente de información. Esto combinado con la banalización de los contenidos en los medios de comunicación y con la preferencia por lo sensacionalista, da lugar a un estado de desinformación.

La complicación del lenguaje jurídico y las nuevas prácticas comunicativas de los medios, ha llevado en ocasiones a la divulgación incorrecta del lenguaje jurídico. No es de extrañar que se cometan importantes errores en lo relativo a los temas jurídicos, teniendo en cuenta las complicaciones que entran en el lenguaje jurídico. Para muchos puede resultar poco importante cómo se llame al presunto culpable, que este sea un asesino o un homicida, que se encuentre en la situación de imputado o investigado; sin embargo, utilizar el nombre adecuado para cada cosa es útil y necesario para entender de lo que se está hablando y de asuntos que nos incumben a todos como ciudadanos.

Por las publicaciones en los medios se ve afectada la imagen de la justicia y también la de las personas que pueden resultar culpables o no de un delito.

María Eizaguirre (2016 : 36) señala que “aunque la justicia en España la imparten los jueces, los platós de televisión se han convertido en otro juzgado: el de la opción pública”. A esto se le denomina como «pena del telediario» que viene a ser una pena injusta porque se castiga por igual al que es inocente como al que es culpable debido a que en ocasiones los medios suplen su falta de información, con suposiciones y conjeturas propias que el público asume como ciertas sin cuestionar en ningún momento la veracidad de la información que reciben probablemente por su falta de conocimiento del lenguaje y contexto jurídico.

Es por ello por lo que es necesario un uso correcto y adecuado del lenguaje jurídico, ya que si el público tuviera las herramientas necesarias para comprender realmente la información jurídica que recibe, estaría mejor capacitado para no caer en la trampa del titular sensacionalista y podría formar mejor sus propios juicios y opiniones.

4.5. ANÁLISIS

En este epígrafe se pretende analizar ejemplos específicos de noticias que han sido recogidas en los medios de comunicación.

En las noticias que se van a analizar se podrá observar, la falta de rigor en el uso del lenguaje jurídico demostrando no solo un fallo comunicativo entre el mundo jurídico y los medios de comunicación, sino también un atentado contra los derechos básicos como la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad o al honor y la dignidad.

4.5.1. CASO A

El 28 de noviembre el periódico ABC de Madrid⁶ publicaba en su portada el titular: «Novio, canguro y asesino» seguido de otro que señalaba, «La mirada del asesino de una niña de tres años». La noticia explicaba que, «los hematomas, magulladuras y quemaduras que una niña de tres años sufrió, presuntamente, a manos del novio de su madre acabaron por provocar su muerte.»

La noticia culpaba sin tapujos a Diego, la pareja de la madre de Aitana, sin dejar ninguna duda en cuanto a la autoría de la muerte de Aitana. En el momento de la

⁶*Periódico ABC*

https://www.abc.es/espana/abci-novio-canguro-y-asesino-200911280300-1132212121746_noticia.html

publicación de la noticia la justicia aún no había tomado ninguna decisión sobre el caso y por lo tanto, Diego era sólo un sospechoso. Sin embargo, conociendo este hecho en la noticia se repite varias veces la palabra «asesino» haciendo referencia a Diego, al que se le atribuyen los hematomas, magulladuras y quemaduras que tenía Aitana.

La presunción de inocencia es un derecho que se encuentra recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española. Este derecho no existe únicamente dentro de un procedimiento judicial, sino que como indica la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico⁷ (2011 :13) “tiene una dimensión extraprocesal que obliga a todos los ciudadanos a considerar a un encausado inocente y a tratarle como tal hasta que recaiga un fallo condenatorio firme”.

Tal y como Eizaguirre Comendador (2016 : 39) apunta: “en la mayoría de ocasiones, la presunción de inocencia no se respeta, en muchos casos brilla por su ausencia. Simplemente se disimula como un “presunto” colocado por delante de cualquier afirmación para evitar posibles querellas”.

En la noticia mencionada anteriormente, primero se le llama al sospechoso «asesino», para después señalar que las lesiones sufridas fueron realizadas «presuntamente» por el sospechoso.

La Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico⁸ (2011 : 14) menciona que, aunque el uso del término «presunto» se emplee de manera bien intencionada, o para evitar posibles problemas, no es correcto tampoco, ya que “desde una perspectiva jurídica, es incorrecto aplicar el término «presunto» a cualquier otra realidad que no sea la inocencia del encausado”.

La presunción de inocencia lo que presume es la inocencia, por lo tanto, decir «presunto culpable» no es correcto porque alude a una presunta culpabilidad.

Por todo lo mencionado queda claro que el titular del ABC no respetaba el derecho a la presunción de inocencia que ostentaba Diego. No sólo eso, sino que la Ley de

⁷Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico (2011)
<http://www.upv.es/entidades/VRSC/info/U0711342.pdf>

⁸Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico (2011)
<http://www.upv.es/entidades/VRSC/info/U0711342.pdf>

Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el 7 de diciembre de 2005 incluye modificaciones en su artículo 520, el cual tiene por objetivo "evitar ese castigo extra que supone aparecer en todos los medios de comunicación".

Eizaguirre Comendador (2016 : 38) lo expresa de esta manera:

“La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio, derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información.”

Por lo tanto, en el momento en el ABC publicaba esta noticia, estaba violando el derecho a la presunción de inocencia, pero, además, el lenguaje sensacionalista, la fotografía y el tono en el que publicaron la noticia iban en contra del derecho del detenido a una detención digna. El sospechoso, Diego, y su imagen pública, quedaron seriamente dañadas por el trato que recibió en los medios de comunicación, algo que ciertos medios explicaron como «una cadena de fallos llevó a un juicio paralelo». Diego fue puesto en libertad y absuelto de toda sospecha, sin embargo, ya había sido juzgado por la sociedad.

4.5.2. CASO B

Los medios de comunicación recogieron otra noticia que hacía referencia a la desaparición de una menor de edad, hecho por el que fueron detenidos tres de sus amigos, uno de ellos también menor de edad.

El intenso tratamiento mediático que tuvo este hecho en todos los soportes (prensa, televisión y radio) acentuaron los problemas relacionados con un incorrecto entendimiento del significado del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a la propia imagen y del derecho a la intimidad.

Desde la detención de los supuestos implicados, los medios de comunicación calificaron jurídicamente los hechos utilizando los términos «asesinato» y «homicidio» como equivalentes y incluyendo o descartando el delito de agresión sexual según las pistas informativas que se iban obteniendo. Como consecuencia de esto, había periodistas que comienzan su crónica señalando “Aquí está detenido el presunto homicida del asesinato de A” y noticias en las que el titular indicaba que “El ex novio de A, confiesa su asesinato ante la Policía” mientras que el texto indicaba que “X confesó el homicidio”.

Los medios de comunicación se referían sistemáticamente a uno de los detenidos como “el asesino confeso”. La utilización de este término trasladaba a la opinión pública un prejuicio sobre la culpabilidad del detenido. No es suficiente con haber confesado para ser un asesino confeso, ya que es un término sumamente matizable. En España, la autoinculpación no implica necesariamente la culpabilidad debido a que depende de su fiabilidad y de la existencia o no de otras pruebas. Además, en un programa de sucesos de una cadena de televisión se entrevistó a cara descubierta a una menor de edad que fue la última novia del detenido y el conductor del programa le preguntó “¿Sabes que has estado enamorada de un asesino?”.

Debido a que uno de los detenidos era menor de edad, en noticias de prensa y en espacios de televisión se especuló con pronósticos de condena. En un programa de sucesos de una cadena de televisión se preguntó a un experto qué pena podría recaer sobre el menor. La respuesta fue “con hasta 8 años” (se supone que de internamiento). De acuerdo con lo que prevé la ley aplicable a los menores en los casos en que se produce una pluralidad de infracciones, esta respuesta era incorrecta. La medida de ocho años de internamiento se aplica a menores de 16 o 17 años que cometen un sólo delito muy grave, pero en este caso, el menor tenía 15 años en el momento de los hechos y se le atribuyeron la autoría de dos delitos muy graves; asesinato y agresión sexual. Si bien es cierto que los participantes del programa podían ignorar estos datos, es sumamente arriesgado adelantar hipótesis de condenas desde el punto de vista del rigor jurídico.

4.5.3. CASO C

La Agencia EFE publicaba el 26 de septiembre de 2018⁹ una noticia en cuyo titular se podía leer «condenado a prisión permanente revisable por asesinar a una bebé en Vitoria».

En este caso, cuando se publica la noticia la Audiencia de Álava ya se había pronunciado sobre el caso, condenado al autor por tirar a una bebé por la ventana, por lo que el término condenado era correcto. Sin embargo, en la noticia usan el término «acusado» en varias ocasiones cuando el acusado es alguien que todavía debe pasar por el proceso posterior a la fase de instrucción, y en este caso la Audiencia de Álava se había pronunciado estableciendo la pena que debía de cumplir.

La Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico¹⁰ (2013 : 14) indica que lo mejor en estos casos es utilizar el calificativo adecuado dependiendo de la fase del procedimiento en la que se encuentre el caso. El uso indiscriminado de términos jurídicos como sinónimos, y el no respeto del derecho a la presunción de inocencia, son errores que se trasladan al público y contribuyen a que se generen juicios injustos por los ciudadanos.

4.5.4. CASO D

El 9 de abril de 2018 el periódico *El País*¹¹ publicó la noticia de la detención de un hombre «por matar a su pareja en Blanes». Por el titular se podía interpretar que el detenido ya había sido condenado por la muerte de su pareja, sin embargo, más adelante se explica cómo los Mossos estaban solamente «investigando un posible caso de violencia machista».

⁹ Agencia EFE

<https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/condenado-a-prision-permanente-revisable-por-asesinar-una-bebe-en-vitoria/10004-3761670>

¹⁰ Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico (2011)

<http://www.upv.es/entidades/VRSC/info/U0711342.pdf>

¹¹ *El País* https://elpais.com/ccaa/2018/04/09/catalunya/1523257318_190261.html

Como ocurría en la noticia anterior del ABC, al hombre se le describe como el «presunto autor del crimen» y se explica que los Mossos «investigan la muerte de una mujer en la localidad de Blanes presuntamente a manos de su pareja», por lo que no se le había condenado como culpable aunque el titular dejara entender lo contrario. De nuevo se le acusa al detenido de ser el autor de la muerte en un titular, para más adelante explicar que está en fase de investigación, por lo tanto, solo se le pudo detener como sospechoso o investigado pero no como autor de la muerte de su pareja.

4.5.5. CASO E

Uno de los errores más recurrentes en los medios de comunicación es la fijación y descripción de cuáles son las conductas delictivas, es decir, la tipificación de delitos. En España todos los delitos están recogidos en el Código Penal, ya que sin tipificación no hay delito. Cada delito conlleva una pena distinta, dado su nivel de gravedad y por lo tanto deben diferenciarse de manera clara. En estos casos lo que lleva a errores es no sólo la incomprensión de los términos y sus implicaciones jurídicas sino también el estilo de redacción en los medios de comunicación que, por evitar repeticiones en un mismo texto, utilizan los términos como sinónimos cuando eso no es posible.

El periódico *El País* del 20 de abril de 2018¹² recogía una noticia bajo el titular que declara que «un hombre mata en Vitoria a su expareja y a la madre de esta y se lanza al vacío». Sin embargo, más adelante se le califica como «presunto asesino» pasando de un rotundo «mata» en el titular, en el que se le atribuye el delito, a presuponer la autoría, una vez más mostrando no solo una falta de rigor en la aplicación del lenguaje jurídico.

El periódico declara que «las primeras investigaciones indican que el presunto autor del crimen ha matado a su ex mujer», mostrando un claro desconocimiento de cada

¹² *El País* https://elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524222160_102471.html

fase del procedimiento, sino también del concepto de «presunción», ya que en una misma frase comienzan suponiendo la autoría de un delito y finalmente acaban atribuyendo el delito al decir «ha matado» todo en la misma frase.

Aparte del error ya descrito, también comete un error de tipificación. En el titular se habla de «matar», pero en el cuerpo de la noticia se refiere al «presunto asesino», cuando matar y asesinar no tienen las mismas implicaciones. El acto de matar se utiliza para referirse al acto de quitarle la vida a otra persona. Por su parte, el homicidio u homicidio doloso, sería un delito de menor gravedad que el anterior. Sin embargo, el asesinato implica un grado más de severidad debido a que asesinar es matar de forma deliberada, con ensañamiento, alevosía y precio, recompensa o promesa. Por lo tanto el delito no es el mismo y la pena tampoco.

4.5.6. CASO F

En el contexto de la violencia machista *El Correo* publicaba una noticia, titulada «Muere apuñalada en Vitoria la sexta mujer víctima de violencia machista en seis días». El subtítulo de la noticia declaraba «el presunto homicida se entregó dos horas después de asesinar a su esposa, de 35 años, en Vitoria», una vez más haciendo un uso arbitrario de los términos «homicidio» y «asesinato». Lo que más sorprende es el hecho de que se incluyan ambos conceptos en una misma frase, dejando claro que no se ha comprendido la diferencia entre los dos términos y sobre todo las distintas implicaciones jurídicas que conlleva cada uno.

4.5.7. CASO G

Al igual que a todos los soportes informativos (prensa, radio y televisión) es exigible a los comunicados de prensa de las instituciones, un empleo rigurosos de los términos jurídicos, ya que en muchas ocasiones constituyen la base de las noticias que transmiten los medios y, a veces, son la única fuente oficial de información.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial contra la Violencia de Género difundieron en junio de 2007 y abril de 2008 notas de prensa debido a la muerte de dos mujeres en Vitoria y Alovera (Guadalajara). La primera fallecida recibió varias puñaladas a manos de su marido y la segunda falleció por disparos de su ex pareja, que acto seguido se suicidó.

En las dos notas de prensa incurren en la utilización impropia del término «presunto» en lugar de «supuesto» para referirse a los autores de los hechos y a los delitos cometidos.

En la nota de prensa sobre el apuñalamiento de la mujer de Vitoria se califica el hecho como un «presunto homicidio» y lo hace erróneamente como posteriormente se observó debido a que el tribunal provincial le condenó por un delito de asesinato al apreciar alevosía en el ataque. Está claro que en el momento en que se difundió el comunicado, se desconocía qué tipo delictivo iba a determinar el tribunal, pero por ello, no se debieron de anticipar a realizar una calificación jurídica.

En el comunicado sobre los hechos ocurridos en Alovera se califican los hechos indistintamente como «presunto asesino» y «presunto homicida». En el primero se atribuye un delito de asesinato mientras que en el segundo uno de homicidio, pero debido a la dificultad para precisar si concurrieron las circunstancias que cualifican el delito de homicidio para ser un asesinato y teniendo en cuenta que para determinarlo es necesario la celebración de un juicio oral, lo correcto habría sido únicamente atribuirle la autoría de la muerte de su ex pareja.

4.5.8. CASO H

A principios de mayo de 2021, el Gobierno Vasco elaboró un borrador en el que recogía las medidas para evitar la propagación de la pandemia de la Covid-19 que, desde su punto de vista, deberían regir en Euskadi en las siguientes 4-6 semanas, ya sin la excepcionalidad que marca el estado de alarma.

A partir de ahí, el Ejecutivo había apostado por adelantarse a un eventual recurso judicial y preguntar previamente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal debía emitir un dictamen sobre la propuesta del Gobierno Vasco antes del viernes 7 de Mayo de 2021 por la tarde, momento señalado por el lehendakari para reunir al órgano que en la Comunidad Autónoma del País Vasco decide sobre las restricciones (LABI) y aprobar el primer decreto para el periodo posterior al estado de alarma.

Estaba previsto que el jueves 6 de mayo de 2021, la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) deliberara sobre el asunto y que al día siguiente emitiera su resolución ofreciendo una respuesta al borrador del decreto del Gobierno Vasco con las restricciones que quería aprobar de cara a la desaparición del estado de alarma.

Antes de que el viernes 7 de Mayo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) publicará sobre las 13.00 horas su dictamen, varios medios se adelantaron emitiendo titulares tales como el siguiente: "El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado la propuesta del Gobierno Vasco de mantener los cierres perimetrales (de la comunidad, territoriales y municipales), el toque de queda y el límite de máximo de personas que se pueden reunir en Euskadi a partir del domingo tras el decaimiento del estado de alarma." mientras que más adelante en la misma noticia se aprecia cómo la decisión definitiva no ha sido emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV): "Más allá de ese rechazo previsible al toque de queda y al cierre perimetral".

Está claro que, en el momento en que se difundió esta noticia, el diario donde se publicó desconocía de la decisión que emitiría el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el viernes 7 de Mayo de 2021, pero precisamente por ello, no debieron de publicar esa noticia aunque el dictamen concluyera afirmando lo que ellos anticiparon con anterioridad.

4.6. CONCLUSIONES

Tras el análisis realizado, queda patente que el lenguaje jurídico no está siendo utilizado de manera correcta por los medios de comunicación.

A pesar de que los medios de comunicación podrían ser un preciado aliado para el sistema judicial y contribuir a una correcta difusión, no sólo del lenguaje jurídico, sino también de los conceptos jurídicos, la situación hoy es más bien la opuesta. El creciente interés de casos jurídicos y la necesidad de resumir y banalizar los contenidos, han supuesto, por un lado, mayor número de noticias jurídicas, y por otro, grandes errores conceptuales en la información que se divulga.

En los ejemplos que se han mostrado anteriormente, se puede observar cómo los medios de comunicación utilizan un lenguaje sensacionalista en el titular, debido a que es lo primero que los lectores leen y llama más la atención hablar de un hombre que mata a su pareja o a la hija de ésta, que de un hombre que quizás haya podido cometer ese delito.

Además, se puede observar cómo los medios de comunicación publican noticias erróneas a sabiendas, desconociendo lo que los Tribunales posteriormente dictarán. Todo ello es consecuencia de la sociedad digitalizada en la que vivimos y por lo que los medios de comunicación deben pelearse para captar la atención del lector.

Los medios de comunicación no muestran ningún respeto al derecho a la presunción y usan el término «presunto» de manera incorrecta y como comodín para intentar corregir los graves errores en los que incurren en sus titulares. También se puede observar cómo la diferencia entre los términos «asesino» y «homicida» tampoco está clara y por ello usan estos dos términos como sinónimos usándolos de manera indiscriminada, aunque las implicaciones jurídicas de cada uno de los conceptos son muy diferentes.

Pero, lo más grave de la cuestión no es el uso erróneo de estos términos, sino las implicaciones que esos errores suponen para las personas involucradas en esos casos. La falta de rigor en el uso de términos y conceptos jurídicos y la preferencia por el morbo y lo sensacionalista lleva a condenas públicas injustas y discriminatorias.

5. CONCLUSIONES GENERALES

Son varias las conclusiones que se pueden sacar tras haber analizado tantos aspectos acerca del lenguaje jurídico y de las controversias que surgen en relación con éste.

Cabe empezar por la naturaleza del lenguaje jurídico. Como establecen todos los modelos judiciales, «la Ley emana del Pueblo» y por lo tanto el pueblo es una parte intrínseca a la ley: la una sin la otra no existe. El problema actual es que, a pesar de esta unión entre ambos conceptos, la ciudadanía y el sistema judicial se encuentran separados por la incomprensión del lenguaje jurídico. Sin duda, el lenguaje jurídico es un lenguaje repleto de especialidades y de particularidades que lo convierten en un lenguaje especializado y muy técnico.

Como señala el Informe de la Comisión para la modernización del Lenguaje Jurídico, “las diversas encuestas sobre el estado de la Justicia que se han realizado en España, ponen de manifiesto que la ciudadanía confía en el rigor y calidad de los profesionales del derecho pero que, al mismo tiempo, no les comprende o, en el mejor de los casos, les comprende con dificultad.”

Esto se debe a que el lenguaje jurídico tradicional tiene unas características propias, como son el uso de tecnicismos, las expresiones propias, párrafos enteros sin comas, frases subordinadas, uso de latinismos y tiempos verbales poco frecuentes. Este conjunto de factores hace que el lenguaje jurídico sea arcaico, barroco y generalmente incomprensible para la ciudadanía.

Esto sin duda, supone un gran inconveniente para la mayoría de los ciudadanos, pues la alta especialización de este lenguaje junto con la utilización innecesaria de un discurso abigarrado hace que sea muy difícil de comprender en la mayoría de los casos. Y no solo para los ciudadanos ajenos al mundo profesional del derecho, sino que para los propios juristas y personas que se dedican al ámbito del derecho también resulta a veces muy difícil de entender. A esto hay que añadirle el contexto jurídico, que no se puede separar del lenguaje, es decir, el lenguaje jurídico se utiliza para describir una realidad jurídica que tampoco es fácil de comprender.

Una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender. Debido a esto, el Ministerio de Justicia está llevando a cabo iniciativas, como la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, con el fin de proponer distintas vías de solución debido a que como indica el Informe de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico “la ciudadanía tiene derecho a comprender, sin la mediación de un «traductor» , las comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho.”

La mejora en la claridad del lenguaje jurídico requiere del compromiso tanto de los profesionales del derecho como de las propias instituciones implicadas. Por ello, el Informe de la Comisión para la modernización del Lenguaje Jurídico establece recomendaciones que se dirigen a ambos sectores con el fin de sentar las bases para un plan de trabajo conjunto.

En primer lugar se encuentran las recomendaciones a los profesionales. En ellas se indica que todo buen profesional del derecho es y debe ser capaz de explicar con sencillez y claridad el significado de un determinado acto o resolución. Para ello bastaría con explicar con palabras llanas, antes del inicio del acto procesal, la razón que trae al ciudadano ante el tribunal, el significado de cuanto ha de acontecer en su presencia y, una vez finalizado, sus consecuencias.

En segundo lugar estarían las recomendaciones a las instituciones. Esto se debe a que las instituciones son esenciales para consolidar las mejores prácticas entre los profesionales del derecho y, por lo tanto, para mejorar la claridad del lenguaje jurídico. El Informe indica que corresponde a las instituciones impulsar medidas que permitan acercar el lenguaje jurídico al ciudadano y poner al alcance de nuestros profesionales del derecho medios suficientes para la búsqueda de la excelencia en su expresión lingüística.

En último lugar se encuentra la recomendación asociada. La sociedad se informa y forma su opinión sobre la Justicia a través de los medios de comunicación. Por ello,

una utilización errónea o imprecisa del lenguaje jurídico por parte de los profesionales de la comunicación genera una ideas equivocadas o confusas del funcionamiento del poder judicial. Es por eso que se recomienda a las instituciones que promuevan la formación especializada de los periodistas en el buen uso del lenguaje jurídico y fortalecer los gabinetes de prensa de los órganos judiciales que realizan labores de intermediación con los profesionales de la comunicación.

Por otro lado, está el factor de los medios de comunicación quienes han incorporado plataformas digitales para divulgar a mayor escala sus contenidos. Debido a que vivimos actualmente en el «siglo de la información» la sociedad no se enfrenta al problema de la accesibilidad, sino al de la selección de la información. Esto se debe a que nos encontramos inundados a diario por información, desde las noticias en su forma habitual, a las que se difunden a través de las redes sociales, o las que nos llegan compartidas a través de WhatsApp.

Como consecuencia, los medios de comunicación deben pelear por captar la atención del lector y ya se han adaptado a este cambio en el consumo de información, y nos presentan contenido cada vez más breve y resumido, más entretenido y llamativo, para así asegurarse que hacemos clic en su titular.

Esta nueva situación entraña consecuencias nefastas para la sociedad como el hecho de estar continuamente expuestos a noticias sensacionalistas (frecuentemente relacionadas con la realidad criminal) y banales, la pérdida de la capacidad crítica de cada uno o la más grave, un uso incorrecto e inadecuado del lenguaje jurídico.

La situación actual es rectificable, si las partes se ponen de acuerdo, es decir, el estado, la justicia, los medios de comunicación y los ciudadanos, ya que la comunicación no es unidireccional, y por lo tanto la responsabilidad es de todos, no sólo de los periodistas, o del sistema judicial o de los ciudadanos.

El derecho cumple con una función social y su vía de comunicación es el lenguaje y por ello debería de ser entendido por todas las personas. Por ello, la recomendación de este trabajo es que desde la Administración se siga con las iniciativas de

modernización del lenguaje, porque aunque se ha tratado de dar solución a este problema mediante el desarrollo de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que reconoce algunos derechos a los ciudadanos frente a la justicia, en concreto el derecho a comprender, no ha habido avances significativos en esta materia ya que el derecho a comprender no es un derecho que a día de hoy sea exigible por los ciudadanos, es decir, que no se han implantado herramientas de control del cumplimiento de este derecho, ni instrumentos para hacerlo efectivo.

Además, los futuros juristas deben de afrontar esto como un reto y empezar a emplear un lenguaje más sencillo y así respetar el derecho a comprender que gozan los ciudadanos. Deben ser las nuevas generaciones las que comiencen a emplear un lenguaje más sencillo y comprensible, deben ser conscientes de la existencia de los derechos de los ciudadanos ante la justicia y de que es necesario hacer un esfuerzo por lograr desarrollar un lenguaje jurídico más moderno, más acorde con la realidad actual. Con ello, no sólo los ciudadanos lograrían comprender los asuntos judiciales que les afectan sino aquellos que los medios de comunicación les hacen llegar diariamente, fomentando así su pensamiento crítico y su capacidad para captar errores y seleccionar noticias jurídicas en los medios de comunicación

Hay que ser conscientes de que queda mucho por hacer. Es necesario saber que para ello es necesaria la colaboración de todo el mundo, tanto de las altas instituciones como de todos y cada uno de los integrantes del mundo jurídico, pues con el trabajo de todos es posible conseguir la modernización del lenguaje jurídico.

Como reflexión final relacionada con el trabajo, estoy satisfecha con el trabajo llevado a cabo. He logrado alcanzar los objetivos que me planteé al comienzo y he logrado responder a los interrogantes que me había planteado y que me hicieron analizar este tema.

6. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

- Álvarez Ramos, E. (2015). *El lenguaje periodístico cultural: nuevas plataformas, nuevos paradigmas*. Universidad de Valladolid. OGIGIA.
- Bourdieu (1997), *Sobre la televisión*, Barcelona. Editorial Anagrama, S.A.
- Camarero Calandria E, Marcos Ramos M. Universidad de Salamanca. *Un estudio preliminar sobre la recepción de las campañas de violencia de género televisivas del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2008-2011)*
- Cazorla Prieto L.M (2007). *El lenguaje jurídico actual*. Cizur Menor.
- De Miguel, E. (2000). *El texto jurídico-administrativo: análisis de una orden ministerial*. Universidad Autónoma de Madrid. Círculo de lingüística aplicada a la comunicación, (nº 4).
- Demonte, V., & Bosque, I. (1999). *Gramática descriptiva de la lengua española*. Madrid. Espasa - Calpe.
- Domínguez F. y Guiu I. (2009). *Marketing jurídico*. Barcelona. Editorial Bosch.
- E. García de Enterría, (1988) *El derecho, la palabra y el libro*, en F. Lazaro Carreter (Coord.), *La cultura del libro*, Ed. Pirámide, Madrid.
- Eizaguirre Comendador, M. (2016). *La llamada "pena del telediario"*. En S. Martín Herrera, *Noticias, las justas*. Madrid: Wolters Kluwer.

- Escudero, I. (2004), *Teledemocracia: el ideal y las catástrofes*. Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura n.º 60.
- Ferguson, C. A. (1971). *Language structure and language use: essays* (Vol. 1). Stanford University Press.
- Gutiérrez, B., Rodríguez, M. I., & Gallego, M. d. (2010). *El papel de los medios de comunicación actuales en la sociedad contemporánea española*. Pontificia Universidad Javeriana Colombia. Signo y Pensamiento.
- Hudson, R. A., & Falcón, X. (1982). *La sociolingüística*. Barcelona. Anagrama.
- Martín, J., Ruiz, R., Santaella, J., Escáñez, J. (1996). *Lenguaje jurídico-administrativo*. Los lenguajes especiales. Granada. Editorial Comares.
- Morales Pastor, J. L. *La enseñanza del español jurídico*. En Sánchez Lobato, J. y Santos Gargallo, I. (eds.) (2004), Madrid: SGEL
- Muñoz Manchado, S. (2017). *Libro de estilo de la Justicia*. Madrid. Espasa.
- Peribañez, S. (2017). *¿Es posible el periodismo al margen del discurso periodístico? Tensiones entre medios y ciudadanos por la información*. CIC. Cuadernos de Información y Comunicación. 22. Madrid.
- Sánchez Alonso, F. (2017). *Lenguaje y estilo administrativo*. EFIAP. Manual del curso.
- Urrutia, H. (2001). *La lengua en los medios de comunicación social*. Universidad de Deusto, Bilbao, España. ONOMAZEIN, 11-30.

PUBLICACIONES EN INTERNET:

- Informe de la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico. (2011).
Ministerio de Justicia de Madrid.
<http://www.upv.es/entidades/VRSC/info/U0711342.pdf>
- Carta de los Derechos de los ciudadanos ante la Justicia. (2002). Congreso de los Diputados.
<http://justizia.eus/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3Ddocumentos-303-carta-derechos.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1290510248164&ssbinary=true&miVar=1622560701464>
- Plan de Transparencia Judicial. (2005). Secretaría de Estado de Justicia.
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-17951
- Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia. (2009). Ministerio de Justicia de Madrid.
http://mjusticia.es/estatico/cs/mjusticia/pdf/PEModernizacion2009_2012.pdf
- Maestre Marín J. (2015). “El derecho a comprender el lenguaje jurídico”.
Recuperado de
<http://www.eltraductorinvisible.es/2015/03/El-derecho-a-comprender-el-lenguaje-juridico>
- “La comunicación del Derecho y la búsqueda necesaria de un lenguaje más inteligible.”
<http://diariojuridico.com/la-comunicacion-del-derecho-y-la-busqueda-de-un-lenguaje-mas-inteligible/>

- Pardo, P. (2015). Jill Abramson: 'Lo único que tiene un medio es su credibilidad. Cuesta mucho crearla y es fácil destruirla'. El Mundo. Madrid.
<http://elmundo.es/television/2015/02/13/54dd02e2ca47410b378b4580.html>

LEGISLACIÓN:

- Constitución Española, de 1978. Título I. Capítulo segundo. Sección 1ª. Artículo 24.